

VENEZUELA EN EL ESPEJO DE ILLIA Y ALLENDE

El momento histórico que vive Venezuela es crítico en el sentido más profundo de la palabra. Crisis entendida como movimiento, ruptura, transformación. La coyuntura que hoy nos afecta está marcada por la conflictividad social, cuya raíz es anterior y va más allá del verbo agresivo o las acciones del Presidente de la República. El cambio que inició la Constitución Bolivariana trajo aparejado la necesidad de legislar y redefinir el perfil del Estado venezolano, su estructura y mecanismos de acción frente a las demandas ciudadanas y su rol de garante efectivo de los derechos humanos. Inicialmente el “proceso revolucionario” no pasó de un reformismo con visión de izquierda y un enfoque de justicia social que cooptó el interés y las esperanzas de una amplia mayoría.

Hoy en cambio, a tres años de gobierno, nos encontramos en un punto de inflexión: un marco legal (las leyes de la habilitante) que si bien amplía y complejiza el escenario del conflicto, introducen elementos que, a mi modo de ver, sí comienzan a perfilar una acción realmente “revolucionaria”, en la medida que tocan la médula de las grandes causas de la injusticia que vive nuestro país. Tal es el caso de la ley de tierras o la de pesca (por citar las más cuestionadas) que se ubican en una línea coherente con el respeto y la consecución de acciones en pro del ejercicio de los derechos humanos de grandes mayorías históricamente postergadas y sumergidas por mecanismos de impunidad, injusticia y discriminación social, como es el caso de los campesinos y los pescadores artesanales. Lo que no es nuevo ni revolucionario es la forma de legislar en coto cerrado, sin permitir acceso a los proyectos y proyectistas de las leyes, el no discutirlos democráticamente, sino presentarlas como hechos cumplidos e irrevocables.

Ahora bien, la legítima reacción de sectores sociales que se han sentido “tocados” en sus intereses puede traer aparejada consecuencias no deseables. El paro cívico respondió al ejercicio de un derecho humano incuestionable (quizás lo llamativo sea que los promotores del mismo, a diferencia de lo habitual en nuestros países, fueron empresarios y no obreros). Pero detrás de estas acciones se tejen una amalgama de elementos políticos, ideológicos y fundamentalmente económicos que pueden, llegado el caso, generar las condiciones para producir un cambio “a la chilena”, vale decir, dando pie a la ruptura del ordenamiento democrático, saltándose las reglas del juego constitucional y apostando a retomar “el orden”(cambiar para que nada cambie), “la paz” (la de los sepulcros) y la “justicia” (la que se destapa un ojo y voltea la balanza al mejor postor...) que generó beneficios por décadas a muchos sectores de poder en Venezuela.

Este escenario no peca de exagerado. América Latina ha sido espejo de situaciones similares: Salvador Allende, presidente constitucional chileno, fue sacado del poder no sólo por un grupo de militares fascistas confabulados, sino por grupos de poder económico que fueron generando las condiciones de inestabilidad necesarias para el golpe (recordemos la famosa huelga de camioneros). Arturo Illia, uno de los presidentes constitucionales argentinos más serios y comprometidos, fue víctima de un golpe de estado sustentado en una oposición política implacable, una élite empresarial y unos medios de comunicación social que, lejos de cumplir con su función y los principios de la ética profesional que los rigen, sentaron con su manipulación informativa los cimientos del nefasto golpe militar que lo derrocó. Estas experiencias, no tan lejanas en el tiempo, deberían invitarnos a la reflexión y fundamentalmente, comprometernos a todos, a buscar salidas que apunten al logro del BIEN COMÚN de TODOS LOS VENEZOLANOS, sobre la base del respeto a la

constitución y a las reglas de la democracia. Esto implica necesariamente la capacidad de superar egoísmos, posiciones elitescas e intereses sectarios. Y es allí donde creo que el juego está trancado.

Prof. Pablo Fernández Blanco
Coordinador del Área de Educación
De la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz